



## Asamblea General

Distr. general  
24 de septiembre de 2002  
Español  
Original: inglés

---

### **Comité Especial encargado de negociar una convención contra la corrupción**

Tercer período de sesiones

Viena, 30 de septiembre a 11 de octubre de 2002

Tema 3 del programa provisional\*

### **Examen del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, con especial hincapié en los artículos 1 a 39**

## **Proyecto revisado de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción**

### **Corrección**

Sustitúyanse los artículos 33 a 39 por el siguiente texto:

#### *Artículo 33*

#### *Penalización del blanqueo del producto del delito<sup>215</sup>*

Variante 1<sup>216</sup>

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito:

a) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito;

b) La administración, custodia, enajenación, cambio, conversión, depósito, entrega en garantía, transporte, transferencia, inversión, alteración o destrucción de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar

---

\* A/AC.261/8.

<sup>215</sup> Durante la primera lectura del proyecto de texto, algunas delegaciones propusieron que el título de este artículo fuera “Actos delictivos relacionados con la corrupción”.

<sup>216</sup> Texto extraído de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13).



a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;

c) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento, destino o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;

d) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación, la autorización y el asesoramiento en aras de su comisión;

e) La adquisición, posesión, utilización, administración, custodia, enajenación, cambio, conversión, depósito, entrega en garantía, transporte, transferencia, inversión, alteración o destrucción de bienes que procedan o representen el producto de un delito, si estando obligada por razón de su profesión, empleo, cargo o comisión, una persona no toma las medidas indispensables para cerciorarse de su procedencia legítima.

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo:

a) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo, los tipificados con arreglo al artículo [...] [Penalización de los actos de corrupción] de la presente Convención;

b) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo al conjunto más amplio posible de delitos determinantes;

c) A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta;

e) Cuando la comisión de alguno de los delitos a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo requiera que se acrediten el conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito, o el acuerdo para su comisión, estos podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.

Variante 2<sup>217</sup>

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

- a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;
- ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;
- b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:
  - i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito;
  - ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo:

- a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes<sup>218</sup>;
- b) Los Estados Parte incluirán como delitos determinantes todos los que se tipifiquen con arreglo a la presente Convención<sup>219</sup>;
- c) A los efectos del apartado b) *supra*, entre los delitos determinantes se incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al

<sup>217</sup> Texto extraído de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). La mayor parte de las delegaciones apoyaron esta variante durante la primera lectura del proyecto de texto.

<sup>218</sup> Durante la primera lectura del proyecto de texto, algunas delegaciones expresaron preocupación por la gran variedad de delitos determinantes que abarcaba este párrafo y sostuvieron que sólo deberían quedar comprendidos en él los delitos determinantes más graves. Algunas otras delegaciones expresaron su preferencia por que se incluyera una amplia gama de delitos determinantes.

<sup>219</sup> El texto de este apartado corresponde al párrafo 3 de lo que era anteriormente la variante 1, que habían propuesto Austria y los Países Bajos. Durante la primera lectura del proyecto de texto, esos países sugirieron que se incorporara esta oración a la propuesta de Colombia. Colombia accedió y, por consiguiente, Austria y los Países Bajos retiraron su propuesta.

derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta;

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se apliquen a las personas que hayan cometido el delito determinante;

f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas<sup>220</sup>.

#### *Artículo 34<sup>221</sup>*

##### *Delitos de contabilidad*

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delitos, cuando se cometan intencionalmente:

a) La creación o utilización de una factura o de cualquier otro documento o registro contable en que figure información falsa o incompleta;

b) La omisión ilícita del registro de un pago.

*[Se suprimieron los artículos 35 y 36]*

#### *Artículo 37<sup>222</sup>*

##### *Penalización de la obstrucción de la justicia*

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de

---

<sup>220</sup> Con respecto a la penalización del blanqueo de capitales, Francia propuso incorporar todas las disposiciones pertinentes del artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ya que opinaba que la propuesta presentada por Austria y los Países Bajos podía complementarse con la incorporación de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 6 de ese instrumento.

<sup>221</sup> Texto extraído de la propuesta presentada por Francia (A/AC.261/IPM/10). Durante la primera lectura del proyecto de texto, algunas delegaciones plantearon la necesidad de incluir además sanciones que no fueran de índole penal a fin de dotar de sentido a este artículo. Algunas delegaciones señalaron la relación de este artículo con el artículo 12 y sugirieron que se fusionara ese artículo con el artículo 34 o que se suprimiera el artículo 34.

<sup>222</sup> Texto extraído de las propuestas presentadas por Colombia (A/AC.261/IPM/14) y México (A/AC.261/IPM/13).

pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención;

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.

*Artículo 38*  
*Responsabilidad de las personas jurídicas*

Variante 1<sup>223</sup>

1. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por participación en los delitos enunciados en los artículos [...] [artículos sobre penalización] de la presente Convención.

2. De conformidad con los principios fundamentales del derecho interno de los Estados Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.

4. Los Estados Parte velarán en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, entre ellas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.

Variante 2<sup>224</sup>

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus principios jurídicos, las medidas que sean necesarias para que pueda establecerse la responsabilidad de una persona jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su legislación, cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en esa calidad, un delito enunciado en la presente Convención. Esa responsabilidad podrá ser penal, civil o administrativa.

2. Se incurrirá en la responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas naturales que hayan cometido los delitos.

3. Cada Estado Parte velará, en particular, por que las personas jurídicas responsables de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo

<sup>223</sup> Texto extraído de la propuesta presentada por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4).

<sup>224</sup> Texto extraído de la propuesta presentada por México (A/AC.261/IPM/13).

estén sujetas a sanciones penales, civiles o administrativas eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones de carácter monetario.

Variante 3<sup>225</sup>

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos tipificados en la presente Convención.
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.

Variante 4<sup>226</sup>

Cada Estado Parte adoptará las medidas penales, legislativas o administrativas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su ordenamiento jurídico, a fin de establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por participación en los delitos enumerados en el artículo [...] [Penalización de los actos de corrupción] de la presente Convención.

Variante 5<sup>227</sup>

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves como el latrocinio y demás delitos tipificados con arreglo a los artículos [...] [artículos sobre penalización] de la presente Convención.
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales o jurídicas que hayan perpetrado los delitos.

---

<sup>225</sup> Texto extraído de la propuesta presentada por Colombia (A/AC.261/IPM/14). Durante la primera lectura del proyecto de texto, la mayor parte de las delegaciones expresaron su preferencia por esta variante, habida cuenta de que, por haber sido tomada de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, su enunciado ya había sido acordado.

<sup>226</sup> Texto extraído de la propuesta presentada por Turquía (A/AC.261/IPM/22).

<sup>227</sup> Texto extraído de la propuesta presentada por Filipinas (A/AC.261/IPM/24).

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.

5. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para que se declare responsables penalmente de conformidad con los principios enunciados en la legislación nacional para los casos de fraude, a los directores y demás altos empleados de empresas o a cualesquiera personas facultadas para adoptar decisiones o ejercer control en una empresa que hayan conocido o consentido el delito.

*Artículo 39<sup>228</sup>*  
*Autoridades especializadas*

Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar que determinadas personas o entidades se especialicen en la lucha contra la corrupción. Gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del derecho interno del Estado Parte, a fin de que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Los Estados Parte garantizarán que el personal de dichas entidades reciba formación y recursos suficientes para desempeñar sus funciones.

---

<sup>228</sup> Texto extraído de la propuesta presentada por Austria y los Países Bajos (A/AC.261/IPM/4). Durante la primera lectura del proyecto de texto se convino en que se examinaría este artículo junto con el artículo 40.